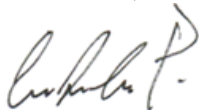


CONSTANCIA SECRETARIAL. JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL. Florencia, el 15 de enero de 2024, se deja constancia que revisado el correo electrónico del despacho hasta las 08:00 a.m., no se evidenció informe por parte de Banco de Bogotá a pesar de estar debidamente vinculada y notificada desde el 03 de enero de 2024 al correo electrónico rjudicial@bancodebogota.com.co. Pasa a despacho de la señora Juez para lo pertinente.

Atentamente,



CRISTIAN ANDRES CUELLAR PERDOMO
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DEL CAQUETÁ
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA**

Florencia Caquetá, quince (15) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

ACCIÓN	: TUTELA
RADICACIÓN	: 18001-40-88-001-2024-00002-00
DEMANDANTE	: MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON
DEMANDADA	: BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA

SENTENCIA DE TUTELA No. 06

I OBJETO DEL FALLO

Procede este Despacho a decidir la acción de tutela interpuesta por MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON, contra BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA, por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad y la libertad económica.

II HECHOS

Indicó la accionante que es comerciante en el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y en el Registro Único Tributario RUT.

Señaló que posee una cuenta de ahorros con BANCOLOMBIA, en la cual durante el año 2022 tuvo ingresos superiores a los \$130.000.000 de pesos, y en el año 2023 su empresa tuvo ventas por un valor aproximado a los \$546.000.000 de pesos.

En el año 2022 realizó su declaración de renta y en el año 2023, debe realizar declaración de renta y facturación electrónica conforme a la normatividad fiscal vigente.



La accionante expresó que en el año 2023 tenía proyectado ampliar el portafolio de productos de su empresa, por lo que solicitó a distintas entidades bancarias prestamos de dinero los cuales fueron negados. En el BANCO AV VILLAS, le negaron el crédito por no tener más de 24 años y le informaron que debía ser empleada o pensionada para acceder a algún producto financiero con esa entidad, por lo que considera no se tuvo en cuenta su actividad económica independiente, lo que le impide el crecimiento económico de su empresa y la generación de empleo.

En BANCOLOMBIA, se le negó el crédito y presuntamente se le indicó que la actividad económica que realizaba era ilegal.

La actora manifestó que posee una tarjeta de crédito con el Banco de Bogotá desde el mes de abril del 2023, en la cual no ha tenido moras en el pago. Asimismo, indicó tener buen comportamiento financiero con sus obligaciones y un puntaje de 761 con datacrédito, que le permite acceder a productos financieros.

Considera la actora que, ante la negativa de las entidades bancarias de realizar el crédito solicitado, las están discriminando por ser mujer y joven.

III PRETENSIONES

Por medio de la presente senda constitucional el accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental a la igualdad y la libertad económica, ante la negativa de los accionadas de otorgarle un crédito.

IV ELEMENTOS DE PRUEBA DE LA ACCIONANTE

1. Estado de cuenta de Bancolombia de fecha 31/03 al 30/06/2023
2. Estado de cuenta de Bancolombia de fecha 07/10/2022 al 31/12/2023
3. Estado de cuenta de Bancolombia de fecha 31/12/2022 al 31/03/2023
4. Cédula de ciudadanía de la accionante
5. Estado de cuenta de Bancolombia de fecha 07/10/2022 al 31/12/2023
6. Captura de pantalla de consulta puntaje en Datacrédito.

V TRÁMITE PROCESAL

La acción de tutela correspondió al despacho por reparto el día 03 de enero de 2024 y mediante auto interlocutorio No. 05 de la misma fecha se admitió y se vinculó a SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, otorgándose el término de dos (02) días para rendir el respectivo informe.

VI RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS

BANCOLOMBIA

En oficio allegado al despacho el 12 de enero de 2024, suscrito por CÉSAR AUGUSTO HURTADO GIL, Representante Legal Judicial de BANCOLOMBIA S.A., indicó que, revisada la base de datos, se verificó que no existe solicitud ante esa entidad bancaria por parte de MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON, ni se evidenció asesoría sobre algún producto.

Se indicó que esa entidad Bancaria tiene unos lineamientos para la administración del Riesgo de Crédito conforme al Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 y en la Circular Externa 029 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se establece la información para que el cliente pueda acceder a un crédito de consumo así:

- *Actividad económica del cliente.*
- *Ingresos, egresos y pasivos.*
- *Lista externa para control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.*
- *Comportamiento histórico de pagos.*
- *Modelos de scoring.*
- *Capacidad de pago.”*

De manera que, para acceder a préstamos Bancolombia como mino los siguientes requisitos:

- *Debe tener entre 18 y 84 años de edad.*
- *Debe contar con un ingreso mínimo 1 SMMLV.*
- *Copia documento de identidad.*
- *Tener certificación laboral.*
- *Constancia de Residencia.*
- *Certificado de ingresos y retenciones o constancia de no declarante.*
- *Seguro de vida deudor es obligatorio.”*

Aclaró que el Banco dependiendo el tipo de crédito puede solicitar una documentación adicional para el estudio de crédito donde *“realiza un análisis de la capacidad de pago del cliente, el riesgo de la operación, su comportamiento crediticio, información sociodemográfica, situación laboral, entre otras, es decir, considera un conjunto de variables y factores cualitativos y cuantitativos para determinar si el cliente es sujeto de una operación de crédito.”*

Por tanto, su intención no es restringir la prestación de servicios financieros, sino que realiza el cumplimiento estricto en materia de políticas de riesgo de la entidad, de manera que, no ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y carece de legitimación en la causa por pasiva

Como prueba aportó la consulta a nombre de la accionante en la base de datos de Bancolombia.

BANCO DAVIVIENDA S.A

Mediante informe rendido el 04 de enero de 2024 suscrito por WILLIAM JIMÉNEZ GIL, Representante para efectos judiciales de BANCO DAVIVIENDA S.A., señaló que, realizada la validación en la base de datos, en el año 2023 la parte actora solicitó productos financieros a través de la App Davivienda Móvil, siendo la última solicitud el 02 de enero de 2024, negándose la solicitud del crédito bajo las causales: *“No cumple con ingresos mínimos para producto”* y *“No cumple con políticas de crédito”*

Manifestó que la negación de productos no se da por situación *“subjetivas o que consideren elementos de discriminación por ningún motivo, sino a elementos objetivos previamente establecidos en cada entidad financiera de acuerdo a sus políticas de riesgo de crédito y al apetito de riesgo de cada entidad.”*



Indicó que las políticas que ejercen las entidades financieras de protección de ahorro del público, están asociadas a factora como ingresos mínimos, toda vez que el Score de crédito no es un elemento independiente y debe considerarse con otros factores, tal y como lo establece la Ley 2157 del 2021. Señaló que la acción de tutela es improcedente por el requisito de subsidiariedad y no ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Mediante oficio allegado el 11 de enero de 2024, suscrito por WILLIAM GOMEZ TEQUIA, Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad, señaló que realizada una revisión en la herramienta SmartSupervision, se tiene que la accionante interpuso una queja por los mismos hechos de la acción de tutela así:

Id. de radicado	Responsable	Entidad	Motivo de la queja	Estado	Queja principal	Fecha de creación	Acciones
178014479553	Mayi Alejandra Rodriguez Alarcon	Bancolombia S.a.	Revisión y/o liquidación de productos	● Recibida	Es queja principal	2024-01-05 11:26:51	Ver

Conforme con lo anterior, indicó que la queja presentada por la actora en contra de Bancolombia se encuentra dentro del término para *“ser atendida por la entidad vigilada Bancolombia se encuentra en término para ser atendida por la entidad vigilada, sin embargo, para acreditar gestión frente a la acción constitucional con oficio No. 2024002592-000 del 11 de enero de 2024, la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones de supervisión establecidas en el artículo 11.2.1.4.11. del Decreto 2555 de 2010, solicitó a la entidad bancaria rendir las explicaciones del caso, otorgándole un término para contestar hasta el 18 de enero del año en curso, el cual tiene el carácter de improrrogable”*

De igual manera, manifestó que mediante oficio No. 2024002592-002 del 11 de enero de 2024, realizó requerimiento al Banco Davivienda, otorgándole un término para rendir informe hasta el 22 de enero del presente año.

Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no es la encargada de satisfacer lo pretendido por la accionante y no ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales, “pues si bien es cierto la entidad accionada hace parte de nuestras vigiladas, esta Superintendencia sólo se encarga de ejercer Supervisión sobre aquella, con el fin de que su administración se ajuste a las disposiciones Constitucionales, Legales correspondientes y a las contenidas en los Reglamentos de la entidad Vigilada, en tal sentido no puede inferirse que la Inspección, Vigilancia y Control que se realiza sobre aquella, se extienda al punto de considerarse a la Superintendencia Financiera como su superior jerárquico o funcional.”, por lo que solicitó ser desvinculada.

Como prueba aportó captura de pantalla de los oficios enviados a Bancolombia y Banco Davivienda.

BANCO DE BOGOTÁ

Conforme a la constancia secretarial del 15 de enero de 2024, se tiene que esta accionada no rindió informe al despacho a pesar de estar debidamente vinculada y notificada vía correo electrónico.

VII COMPETENCIA

Frente a la competencia para asumir el conocimiento, se tiene que la acción de tutela se dirige contra entidades financieras particulares por lo que es competencia de los Juzgados Municipales. Adicionalmente, se tiene que en la descripción de los hechos a pesar de no existir claridad del lugar de la vulneración de los derechos invocados, toda vez que no se indicó en que ciudad la accionante solicitó ante los accionados unos productos financieros y que estas aparentemente se los negaron situación que considera la actora vulnera sus derechos fundamentales, se tiene que, se indicó como domicilio de la actora el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, de manera que, los efectos de la presunta vulneración se dan en dicha municipalidad, no obstante, se debe señalar que teniendo en cuenta la vacancia judicial colectiva la cual inició el 20 de diciembre de 2023 y finalizó el día 10 de enero de 2024, en esa municipalidad no se encontraban juzgados municipales disponibles, toda vez que únicamente, se encontraban en funcionamiento los Juzgados Penales Municipales ubicados en el Circuito de Florencia Caquetá, por lo que el reparto fue asignada a este despacho, por tanto, se admitió la acción de tutela a prevención.

VIII PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Concierne al Despacho determinar si BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA, se encuentran vulnerando los derechos fundamentales de MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON, a la igualdad y la libertad económica, presuntamente, al negarle un crédito solicitado ante esas entidades financieras por razones de ser mujer y una persona joven.

IX CONSIDERACIONES NORMATIVAS Y FÁCTICAS

EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

➤ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

La señora MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON, se encuentra legitimada por activa ya que es la persona que solicitó un crédito ante las accionadas, el cual fue denegado.

➤ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

En el caso sub examine, se acredita la legitimación en la causa de BANCO DE BOGOTÁ, BANCOLOMBIA Y BANCO DAVIVIENDA, toda vez que presuntamente, son las entidades financieras, a las cuales la accionante acudió a solicitar un crédito.

➤ REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD

La jurisprudencia constitucional de manera reiterada en cuanto a este requisito estableció, mediante Sentencia T-055 de 2020, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, que:

“(…) El recurso de amparo, como un mecanismo sumario instituido con el fin de lograr la protección de derechos fundamentales, no puede ser usado para sustituir los demás procedimientos judiciales existentes en el ordenamiento jurídico –excepto si estos carecen de idoneidad o eficacia, o si se está en presencia de un perjuicio irremediable. Reconocer el carácter residual de la acción permite la preservación de las competencias legales atribuidas a las distintas jurisdicciones. (...) (sic)”.



De lo anterior, se tiene que en el presente caso se torna en improcedente la acción de tutela, ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, como la reclamación directa ante las accionadas o ante el Defensor del Consumidor Financiero, asimismo, la interposición de queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la acción de protección ante el Consumidor Financiero.

CASO CONCRETO

Del caso sub examine se observa que la acción constitucional se interpone en contra de BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA, toda vez que indicó la señora MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON, vulneraron su derecho fundamental a la igualdad y libertad económica ya que se negaron en otorgarle un crédito, ya que consideró que la negativa de las accionadas se basó en razón a que es una persona joven y por ser mujer.

Es pertinente mencionar que la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, procede en los siguientes eventos:

(i) No disponga de otro medio de defensa judicial. (ii) exista, pero no sea idóneo o eficaz a la luz de las circunstancias del caso concreto. (iii) Se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Conforme a lo anterior, y al realizar una valoración probatoria del escrito de tutela, se tiene que la accionante, dispone de otros recursos judiciales para obtener una solución frente a la negativa de las entidades financieras de otorgarle un crédito tales como la reclamación directa ante las accionadas o ante el Defensor del Consumidor Financiero, asimismo, la interposición de queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la acción de protección ante el Consumidor Financiero.

De la contestación de la Superintendencia Financiera de Colombia, se tiene que la actora acudió ante dicha entidad, interponiendo una queja bajo los mismos hechos y según la prueba aportada por esa superintendencia, la queja fue creada el 05 de enero de 2024 en contra de Bancolombia S.A, donde se indicó como motivo “Revisión y/o liquidación de productos”, así:

Id. de radicado	Responsable	Entidad	Motivo de la queja	Estado	Queja principal	Fecha de creación	Acciones
178014470553	Mayi Alejandra Rodriguez Alarcon	Bancolombia S.a.	Revisión y/o liquidación de productos	● Recibida	Es queja principal	2024-01-05 11:26:51	🔗 Ver

De manera que, requirió a BANCOLOMBIA para rendir informe otorgándosele plazo hasta el 18 de enero de 2024. Asimismo, mediante oficio No. 2024002592-002 del 11 de enero de 2024, realizó requerimiento al Banco Davivienda, otorgándole un término para rendir informe hasta el 22 de enero del presente año.

De lo anterior, se tiene que existe un trámite administrativo iniciado por la Superintendencia Financiera de Colombia, autoridad la cual es idónea para dirimir dicha situación por tratarse de la accionadas, entidades financieras bajo la supervisión de esa superintendencia.

El decreto 2591 de 1991 en los artículos 5 y 6, consagran las causales de procedencia y de improcedencia de la acción de tutela, así:

1. “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” (Lo subrayado hace énfasis el despacho).

Respecto a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-451/10, señaló lo siguiente:

“Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados. Ello en consonancia con el artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 que establecen como causal de improcedencia de la tutela: “[cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.”

La parte actora, no demostró el presunto perjuicio irremediable para acudir directamente en acción de tutela, mientras se resuelve de fondo la queja interpuesta ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

En tal sentido no se acreditó la subsidiariedad de la acción de tutela, ya que existe un proceso administrativo jurisdiccional iniciado por la Superintendencia Financiera de Colombia, autoridad la cual, tiene la competencia, idoneidad y capacidad para otorgar una solución de fondo a lo expuesto por la actora frente a la negativa de unas entidades financieras en otorgarle un crédito.

El juez constitucional, no puede desplazar la competencia de aquellas autoridades legalmente constituidas para dirimir asuntos específicos, tal como el expuesto en el presente cas, sin que se logrará probar el perjuicio irremediable para acceder al estudio en profundidad de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, de manera que, se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En virtud de lo anterior el Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia – Caquetá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

X RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por existencia de otro medio de defensa judicial y la no demostración de un perjuicio irremediable, que fuese interpuesta por MAYI ALEJANDRA RODRIGUEZ ALARCON, en contra de BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA, conforme lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de impugnación en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. En caso de no ser impugnada la presente providencia, envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión (Inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991).



TERCERO: Si la tutela es excluida de Revisión, archívese de forma definitiva una vez regrese de la Corte Constitucional.

CUARTO: Notifíquese esta providencia conforme los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELIZABETH CRISTINA ORTEGA VALDERRAMA

LA JUEZ PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE FLORENCIA

Firmado Por:

Elizabeth Cristina Ortega Valderrama

Juez

Juzgado Municipal

Penal 001

Florencia - Caqueta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d992558c01687591c3d5eabd0e2fcd4a26a7fadd8281a72617835c161c10c243**

Documento generado en 15/01/2024 04:35:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>